Han sido parte demandadas el **ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID**, representado en estas actuaciones por la Sra. Procurador de los Tribunales D^a , el **CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS de PROCURADORES de ESPAÑA**, representado por el Sr. Procurador de los Tribunales D. , así como los siguientes Srs. y Sras. Procuradores de los Tribunales, todos ellos actuando en su propio nombre y representación, D. , D^a , D^a , D^a , D^a y D^a así como la **COMUNIDAD DE MADRID** representada y asistida la Sra. Letrado de sus Servicios Jurídicos en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 23 de septiembre de 2016 el Sr. Procurador de los Tribunales D. , en su propio nombre, en de la y en el de D. , D^a D. , D. , D^a D^a y D. , compareció ante esta Sala de lo Contencioso - Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interponiendo recurso contra los siguientes actos:

1. Orden 1841/16 de 9 de mayo, del Consejero de Presidencia y Justicia por la que se dispone la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la CAM y la publicación en el BOCM de la modificación de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid.
2. Resolución de fecha 18 de mayo de 2016 de la Dirección General de Justicia y Seguridad de la CAM por la que se dispone la publicación en el BOCM de la modificación total de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid.
3. Los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid publicados en el BOCM de fecha 27 de junio de 2016.

SEGUNDO.- Tras subsanarse los defectos detectados en fecha 5 de octubre de 2016 se dispuso admitir el recurso disponiéndose la publicación de la interposición del recurso así como recabar el expediente administrativo con la finalidad de que los recurrentes pudieran formular demanda.

TERCERO.- Recibidos los expedientes administrativos tramitados, tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, mediante

diligencia de fecha 15 de noviembre de 2016 se dispuso dar traslado a la representación de los recurrentes a fin de que formularan demanda.

El siguiente 29 de noviembre de 2016 la representación de los recurrentes interesó se completase el expediente con determinados particulares, a lo que, mediante diligencia del siguiente día 30 se accedió. Recibidos los particulares interesados, mediante diligencia de fecha 11 de enero de 2017 se confirió traslado a la representación de la actora a fin de formular demanda, lo que no verificó en el plazo concedido, por lo que, el siguiente 7 de febrero de 2017 se dictó auto teniendo por caducado el recurso.

La representación de los actores rehabilitó el plazo, y, el siguiente 21 de febrero de 2017 presentó demanda arreglada a las prevenciones legales, en la que, tras alegar lo que a su derecho convenía terminaba con la súplica que transcribimos

« ... acuerde decretar la nulidad de pleno derecho de los mismos, única predicable de las disposiciones generales, así como la de los subsiguientes actos administrativos dictados en aplicación de los mismos que no hubiesen devenido firmes, todo ello con expresa condena en costas a demandados y codemandados» .

CUARTO.- Mediante auto de fecha 23 de febrero de 2017 se tuvo por rehabilitado el plazo dejándose sin efecto el auto de fecha 7 de febrero anterior, acordándose dar traslado del expediente a la representación del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid a fin de que formulase demanda.

El siguiente 13 de marzo de 2017, la representación del Colegio de Madrid presentó escrito de alegaciones previas, en el cual suscitaba dos cuestiones, a) Falta de capacidad procesal de la _____, toda vez que no se había aportado el documento del art.45.2 d) , el cual fue aportado de modo extemporáneo con la demanda, considerándolo la representación del ICPM, insuficiente para el ejercicio de la presente acción, y, b) Falta de legitimación de los demandantes y de la _____

El 14 de marzo siguiente se acordó dar traslado del escrito de alegaciones al recurrente, tras lo cual, el siguiente 4 de abril se dictó auto cuya parte dispositiva era la siguiente:

«Estimar en parte las alegaciones previas planteadas por la representación del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, considerando que D. _____ y D^a _____ carecen de legitimación para este procedimiento. Rechazando las restantes alegaciones previas propuestas.»

QUINTO.- En fecha 4 de abril de 2017 la representación del Colegio de Procuradores de Madrid procedió a contestar la demanda, en escrito en el que, tras alegar lo

que a su derecho convino terminaba con la súplica que se tuviese por formulada la demanda, y previos los trámites legales oportunos se acuerde:

«1.- Declarar la inadmisibilidad de la demanda por falta de capacidad y legitimación de los recurrentes, con expresa imposición de costas a los mismos.

2.- Subsidiariamente, la desestimación íntegra del presente recurso por falta de capacidad y legitimación de los recurrentes con expresa imposición de costas a los mismos.

3.- Subsidiariamente, la desestimación íntegra del presente recurso por los motivos de fondo expuestos en la presente contestación a la demanda, con expresa imposición de costas a los recurrentes.»

SEXTO.- En fecha 18 de abril de 2017 se dictó diligencia concediéndose plazo a las restantes partes codemandadas a fin de que procedieran a contestar la demanda, lo que verificaron en las siguientes fechas, el 9 de mayo siguiente el Procurador D.

en su propio nombre y derecho, el siguiente 24 de mayo, la Procurador D^a

en su propio nombre y derecho, el Procurador D.

en representación del Consejo de Colegios de Procuradores de España, la Procurador D^a

en su propio nombre y derecho, la Procurador D^a

en su propio nombre y derecho, todos ellos con súplicas análogas a las del Colegio de Procuradores de Madrid.

SEPTIMO.- El siguiente 29 de mayo se dictó diligencia teniendo por contestadas la demanda por los Procuradores anteriores, a la vez que se declaraba caducado el plazo respecto de los Procuradores Sra. , Sra. y Sra. , todas ellas en su propio nombre y derecho.

OCTAVO.- En fecha 1 de junio la representación de los actores presentó un escrito de “hechos de nueva noticia” referidos a la sentencia de 21 de abril de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 referida a las elecciones del Colegio de Procuradores de Madrid de febrero de 2015.

NOVENO.- En la misma fecha la representación de los actores presentó nuevo escrito con determinada documentación referida a los plazos de presentación de enmiendas que se habían adoptado en otras ocasiones, con la finalidad de desvirtuar las alegaciones de las partes.

DECIMO.- Mediante providencia de fecha 13 de junio se acordó requerir a la recurrente para que acreditase la firmeza de la sentencia del Juzgado nº 34 que se aportaba, así como dar traslado del otro escrito a las restantes partes.

En fecha 23 de junio la representación del Colegio de Procuradores presentó escrito en el que acreditaba haber interpuesto recurso de apelación frente a la sentencia de 21 de abril de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 a la que se aludía en el antecedente octavo. En fecha 28 de junio siguiente la representación procesal de los actores presentó escrito dando cumplimiento al requerimiento efectuado por la providencia de fecha 13 de junio anterior.

UNDECIMO.- En fecha 7 de julio de 2017 la Sra. Procurador D^a en su propio nombre y derecho presentó escrito en el que interesaba se declarase la inadmisibilidad del recurso al no haberse aportado documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones a las personas jurídicas ex art. 45.2 d) de la LJCA. En parecido sentido, el día 11 siguiente, la representación del Colegio de Procuradores de Madrid presentó escrito en el que expresaba lo que denominaba hecho de nueva noticia y como consecuencia del mismo se acordase modificar el auto de 7 de abril en el sentido de entender que no ha quedado acreditada la representación de la ni su voluntad de comparecer en calidad de recurrente en el presente procedimiento, motivo por el cual, no puede continuar ejerciendo de parte actora en el presente procedimiento.

DUODECIMO.- Por resolución de fecha 27 de julio se dispuso escuchar a las partes al respecto, habiéndose impugnado los referidos escritos por la representación de la Asociación recurrente. Los Procuradores de los Tribunales Sr. D. y D^a se adhirieron respectivamente a las peticiones de la Sra. Procurador D^a y de la representación del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.

Tras ello, el siguiente 21 de noviembre de 2017 se dictó auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Conceder a la representación de la Asociación un plazo de diez días para que subsane el defecto detectado aportando la documentación relativa a la presentación en el Registro de Asociaciones de los Acuerdos adoptados en la Asamblea de fecha 21 de septiembre de 2016 referidos a los órganos de representación de la Asociación. Se advierte a dicha entidad que, para el caso que no subsane en el plazo concedido dicho defecto cesará la misma en la condición de parte. No hacemos pronunciamiento en orden a las costas causadas.»

DECIMOTERCERO.- Por decreto de la misma fecha se acordó fijar la cuantía del procedimiento como indeterminada a la vez que por auto de igual fecha se dispuso lo relativo a la práctica de la prueba propuesta.

DECIMOCUARTO.- En fecha 21 de diciembre de 2017 la representación de los actores presentó escrito en el que tras aportar determinada documentación interesaba se tuviese por subsanado el requerimiento establecido en el auto de 21 de noviembre de 2017.

Paralelamente, la Sra. Procurador , en su propio nombre, el 3 de enero pasado, presentó escrito en el que expresaba que no consideraba subsanado los defectos del auto de fecha 21 de noviembre de 2017. El siguiente 10 de enero de 2018, la Procurador de los Tribunales Sra. presentó escrito de análogo tenor.

Por diligencia de fecha 10 de enero se dispuso escuchar a las partes sobre las nuevas alegaciones de la demandada y codemandada, formulándose el siguiente 19 de enero alegaciones por los recurrentes así como en fecha 23 de enero de 2018 por la Sra. , en su propio nombre y derecho.

En fecha 15 de febrero siguiente la representación del Colegio de Procuradores presentó escrito en el que, a más de interesar impulso procesal, comunicaba a la Sala el contenido de la Sentencia de fecha 7 de febrero pasado por la que se desestimaba el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado nº 34 de lo Contencioso de Madrid de fecha 21 de abril de 2017, que anulaba, entre otros extremos, la proclamación de candidatos electos en las elecciones de 2015 para la Junta de Gobierno del ICPM, interesando se pronunciase esta Sección sobre la validez de los Estatutos de 2015, que habrán de ser aplicados en la nueva convocatoria.

A tal escrito se respondió por la representación de los recurrentes con escrito de fecha 16 de febrero pasado en el que expresaba su oposición al respecto.

Nuevamente en fecha 21 de febrero, la Procurador de los Tribunales Sra. en nombre del ICPM presentó escrito en el que expresaba que la Junta de Gobierno del ICPM había presentado su dimisión en fecha 13 de febrero de 2018, designándose una Junta Provisional. A su vez, expresaba que tales circunstancias no afectaban a la eventual capacidad procesal del ICPM.

El siguiente 21 de febrero de 2018 la representación de los actores presentaron escrito en el que aportaban nueva solicitud de inscripción de datos de la en el registro de Asociaciones, escrito al que formularon alegaciones la Sra. Procurador D^a

en fecha 22 de febrero de 2018 formulando nuevamente alegaciones el Procurador Sr. en nombre de los recurrentes el pasado día 23 de febrero de 2018.

DECIMOQUINTO.- En fecha 14 de marzo de 2018 se dictó auto cuya parte dispositiva era la siguiente:

«Declarar la capacidad para actuar como parte en este procedimiento tanto de la Asociación , como del Ilustre Colegio de Procuradores.

Conforme al art. 64 de la LJCA se abre el trámite de conclusiones sucintas, concediéndose a la parte recurrente el plazo de DIEZ días para que evacue las mismas.

No hacemos pronunciamiento en orden a las costas de este incidente.»

DECIMOSEXTO.- En fecha 9 de abril de 2018 se tuvo por caducado el plazo para evacuar conclusiones, concediéndose plazo a las partes demandadas para que evacuasen las propias.

Entretanto, el 10 de abril se tuvo noticia de la suspensión del Procurador de los Tribunales D. , quien actuaba en nombre de los recurrentes, por lo que, se dispuso cursar la notificación al Letrado Sr. D. a la vez que se le requería para que designase un nuevo Procurador para la representación de los recurrentes.

En fecha 18 de abril de 2018 la Sra. Procurador de los Tribunales D^a en nombre de los recurrentes formuló escrito de conclusiones sucintas.

Igualmente aportó en otro escrito de la misma fecha resolución del Registro Nacional de Asociaciones por el que se tenían por inscritos los cargos de la en virtud del acuerdo de 17 de diciembre de 2015, constando como Secretario de la referida asociación D. el cual elaboró el acuerdo de interposición del recurso.

En fecha 18 de abril siguiente se requirió a los recurrentes para que otorgasen poder de representación a favor de D^a , lo que verificaron en tiempo y forma.

Los demandados y codemandados fueron, en su tiempo, presentando escrito de conclusiones, a excepción de las Procuradoras Sras. y , a quienes mediante diligencia de fecha 16 de mayo de 2018 se las tuvo por precluidas en el trámite de conclusiones, si bien la Procurador Sra. presentó en el plazo del art. 128 de la LJCA escrito de conclusiones, por lo que, mediante diligencia de 24 de mayo de 2018 se tuvo por rehabilitado el plazo.

DECIMOSEPTIMO.- En fecha 4 de junio de 2018 tuvo entrada en la Sección escrito de la Sra. Procurador de los Tribunales D^a , actuando en representación de la y del resto de los recurrentes en el que aportaba resolución del Registro Nacional de Asociaciones de fecha 25 de mayo de 2018 por el que se inscribían los cargos electos de la en las elecciones de 9 de febrero de 2018.

Por providencia de fecha 5 de junio de 2018 se dispuso dar traslado a las restantes partes del escrito anterior, formulándose alegaciones al respecto por las Procuradoras D^a

en su propio nombre, D^a _____ en nombre del ICPM, y D^a _____, igualmente en su propio nombre. Esta última impugnaba, por falso, la certificación que había servido de base a la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones.

A la vista de esta última alegación se dispuso mediante providencia de fecha 20 de junio escuchar a la representación de la _____ al respecto de la legitimidad de las firmas de la certificación antedicha.

DECIMOCTAVO.- En fecha 20 de junio se dictó providencia acordando el señalamiento para deliberación y fallo el día 18 de julio de 2018.

DECIMONOVENO.- El 27 de junio siguiente tuvo entrada en la Sección escrito de la representación de la _____ oponiéndose a la cuestión planteada por la Sra.

_____, tras lo cual el mismo día, se dictó providencia en la que se acordaba mantener el señalamiento para deliberación disponiéndose resolver sobre la planteada en la sentencia.

VIGESIMO.- El 18 de julio de 2018 fecha tuvo entrada escrito del día anterior de la representación procesal del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid en el que expresaba que uno de los documentos aportados por la _____ pudiera ser falso, aportando junto con el expresado escrito un informe pericial caligráfico realizado por la Perito Sra. D^a _____, en el que se concluía que, determinadas firmas que aparecían en un documento presentado ante esta Sala y ante el Registro de Asociaciones, pudieran ser falsas. En dicho escrito interesaba se dedujese testimonio del referido escrito y se remitiese el mismo al Juzgado que correspondiese para que se instruyesen diligencias penales, a la vez, que solicitaba se acordase el cese en la condición de parte de la _____ y, en su caso, se valorase las consecuencias que sobre la condición de parte de los codemandantes, en cuanto personas físicas, figuran en el referido escrito.

VIGESIMOPRIMERO.- Por providencia de 18 de julio de 2018 se dispuso suspender el señalamiento y dar traslado a las partes para que expresasen su parecer habiéndose formulado alegaciones al respecto.

VIGESIMOSEGUNDO.- En fecha 27 de septiembre de 2018 la representación del ICPM ha presentado un escrito en el que expresa que comunicó los hechos que se mencionan en el antecedente vigésimo de esta sentencia al Ministerio Fiscal, quien ha interpuesto denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano, que ha sido repartida al Juzgado de Instrucción número 40 quien incoó Diligencias Previas nº 1830-2018, por lo que interesaba, además de las mismas pretensiones que se interesaron en el escrito de 17 de julio, que se acordase la suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal.

VIGESIMOTERCERO.- Mediante auto de fecha 3 de octubre de 2018 se acordó no haber lugar a la suspensión por prejudicialidad del curso de los presentes autos así como a ninguna de las pretensiones contenidas en el escrito del Ilustre Colegio de Procuradores de fecha 17 de julio de 2018, acordándose, además, imponer las costas del presente incidente a la representación del Colegio de Procuradores de Madrid.

VIGESIOMOCUARTO.- En fecha 17 de octubre de 2018 la representación del ICPM interpuso recurso de reposición contra el auto de 3 de octubre anterior, recurso que fue admitido por diligencia de la misma fecha, dándose traslado a las partes para impugnación.

VIGESIMOQUINTO.- En fecha 19 de octubre de 2018 la Sra. Procurador D^a en su propio nombre y derecho presentó escrito en el que interesaba la nulidad de los autos de fecha 14 de marzo de 2018, y, por extensión la del auto de 3 de octubre de 2018, interesando se “expulsase” a la parte recurrente. Tras formular alegaciones al respecto la representación de los actores, en fecha 30 de enero de 2019 se dictó providencia en la que se acordaba la inadmisión del incidente presentado.

VIGESIMOSEXTO.- Por auto de igual fecha 30 de enero de 2019 se dispuso desestimar el recurso interpuesto por el ICPM contra el auto de fecha 3 de octubre anterior, imponiéndose, igualmente, las costas del mismo a la representación del ICPM.

VIGESIMOSEPTIMO.- En fecha 6 de febrero de 2019 la Sra. Procurador D^a en su propio nombre y derecho presentó escrito en el que interesaba “aclaración y complemento” de la providencia de 30 de enero anterior, acordándose, por providencia de fecha 7 de febrero de 2019, no realizar aclaración ni complemento alguno respecto de la providencia anterior de fecha 30 de enero de 2019, y, acordándose, que una vez constase la notificación a todas las partes de la referida providencia se acordaría sobre los trámites a seguir.

VIGESIMOCTAVO.- El siguiente 22 de febrero de este año se acordó el señalamiento para deliberación y fallo para el 10 de abril de 2019.

VIGESIMONOVENO.- En fecha 12 de marzo de 2019 la representación procesal de los actores presentó un escrito en el que comunicaba a la Sección que las diligencias previas nº 381/19 del Juzgado de Instrucción 40 de Madrid (seguidas por la presunta falsedad en el acta aportada al Registro de Asociaciones, a las que se refería el antecedente vigésimo de esta sentencia) habían sido archivadas. Por providencia de fecha 13 de marzo se dispuso dar traslado a las restantes partes, por si a su derecho convenía formalizar alguna alegación. La Sra. en su propio nombre interesó se cesase en la calidad de parte a la recurrente , igualmente la representación del ICPM, expresó que el auto de archivo no era firme, a la vez que interesaba, igualmente, se cesase en la condición de parte a la . Igualmente, la Procurador Sra. presentó escrito en el que

interesaba se “dictase sentencia desestimatoria entre otros motivos por la absoluta falta de legitimación de todos los demandantes, a sus efectos (sic)”.

TRIGESIMO.- Mediante diligencia de ordenación de fecha 29 de marzo pasado se dispuso la entrega de los escritos anteriores a las restantes partes, estándose al señalamiento para deliberación el siguiente 10 de abril, fecha en que la misma tuvo lugar, continuándose esta el siguiente 17 del mismo mes.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Rafael Botella y García-Lastra, quien expresa el parecer de la Sección.

A los anteriores son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La Sra. Procurador de los Tribunales D^a _____, en su propio nombre, en de la _____ y en el de D. _____, D. _____, D. _____ y D^a _____ interpone el presente contra los siguientes actos:

a.- Orden 1841/16 de 9 de mayo, del Consejero de Presidencia y Justicia por la que se dispone la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la CAM y la publicación en el BOCM de la modificación de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid.

b.- Resolución de fecha 18 de mayo de 2016 de la Dirección General de Justicia y Seguridad de la CAM por la que se dispone la publicación en el BOCM de la modificación total de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid.

c.- Los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid publicados en el BOCM de fecha 27 de junio de 2016.

La pretensión de los recurrentes la hemos dejado transcrita en el antecedente de hecho tercero de esta sentencia por lo que, a lo ahí expresado nos remitimos ahora.

SEGUNDO.- Toca analizar, con carácter liminar, las cuestiones previas que se vienen suscitando- sustancialmente- por la representación del Colegio de Procuradores y por la Procurador Sra. D^a _____, en su propio nombre, y que se refieren a la legitimación de la _____, a la capacidad de esta, toda vez que los demandados consideran que la misma no ha cumplido con la exigencia del 45.2.d) de

la LJCA, y la cuestión referida a la legitimación de los recurrentes en cuanto personas individuales.

Ciertamente estos temas, están a juicio de la Sección bastante agotados, pues han ido quedando resueltos en los autos de 21 de noviembre de 2017, 14 de marzo de 2018, y, conexos con estos dos, los de 3 de octubre de 2018 y 30 de enero de 2019. Sin embargo, el art. 58-1 de la LJCA, permite la reiteración de las alegaciones previas formuladas en la contestación a la demanda, y, en cuanto tales, deben ser objeto de pronunciamiento en la sentencia, pese a que las mismas merecieron respuesta parcialmente negativa en el auto de 21 de noviembre de 2017.

TERCERO.- Empecemos por la falta de capacidad de la . En este punto sostiene la representación del ICPM y parte de los codemandados que, los recurrentes no aportaron el acuerdo corporativo para la interposición de acciones, exigido por el art. 45.2.d) de la LJCA, y, que, pese a los requerimientos efectuados por la Sala nunca han llegado a cumplir con tal exigencia, toda vez que los Estatutos de la , establecen una vigencia de sus cargos de un año, con lo que, según el Colegio de Procuradores, a partir del 17 de diciembre de 2015, la carecería de capacidad, sin que se pueda dar validez subsanatoria al escrito aportado en fecha 4 de junio de 2018, en el que se aportaba la resolución del Registro de Asociaciones de fecha 25 de mayo por el que se inscribían los cargos electos de la acordados en fecha 9 de febrero de 2018.

Hay que notar, en este punto, que ya la Sección declaró la plena capacidad de la Asociación recurrente en el auto de fecha 14 de marzo de 2018, auto que no fue nunca recurrido por ninguna de las partes.

Dicho todo lo anterior hemos de notar, como ya apuntamos en el auto de fecha 30 de enero de 2019 que el problema de la renovación o no de los cargos asociativos es un tema que tiene trascendencia interna en el seno de la asociación, pero, a nuestro juicio, no afecta las relaciones externas de esta con terceros, por lo que, como entonces se razonó, no había inconveniente en entender válidamente constituida la relación jurídico procesal.

En efecto, el art. 5 de los Estatutos de la establece que el mandato de los miembros de la Junta Directiva, Presidente, Secretario y Tesorero de la Asociación, tiene una duración anual. Estableciéndose en el art. 7º de los mismos que “los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para la cual fueron elegidos continuarán ostentado sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que le sustituyan”, con lo que, consideramos- pese al esfuerzo argumentativo de la representación del ICPM y de la Procurador Sr. - que este sistema de prórroga automática de los cargos asociativos ampara perfectamente los acuerdos adoptados por la en febrero de 2018 y que, posteriormente tuvieron acceso al Registro Nacional de Asociaciones.

Por ello reiterando los autos de fechas 21 de noviembre de 2017, 14 de marzo de 2018, y, conexos con estos dos, los de 3 de octubre de 2018 y 30 de enero de 2019, hemos de concluir que la , ostenta capacidad para comparecer en calidad de parte en este procedimiento, entendiéndose subsanado el requisito del 45.2.d) de la LJCA, que ha venido siendo denunciado por algunos demandados.

CUARTO.- Hemos de analizar ahora la falta de legitimación de la , que es cuestionada por la representación del Colegio de Procuradores.

Dispone el art. 7.3 de la LOPJ que *"Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción"* y el art. 19.1.b) de la LJCA , establece que *"están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos"*.

Aún la ampliación que se le ha venido otorgando al concepto de interés legítimo, no cabe una extensión tal que venga a identificar la legitimación por interés con la acción popular o en defensa estricta de la legalidad, excepto cuando así venga autorizado expresamente por la ley.

En este sentido la sentencia de 27 de noviembre de 2012, tomando como referencia la Sentencia de 29 de junio de 2005, expresaba que:

"Debe recordarse a estos efectos, que la legitimación, que constituye un presupuesto inexcusable del proceso, según se deduce de la doctrina de esta Sala (STS de 14 de octubre de 2003 , de 7 de noviembre de 2005 y de 13 de diciembre de 2005), así como de la jurisprudencia constitucional (STC 65/94), implica, en el proceso contencioso-administrativo, la existencia de una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión deducida en el recurso contencioso-administrativo, en referencia a un interés en sentido propio, identificado y específico, de tal forma que la anulación del acto o la disposición impugnados produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto (SSTC 105/1995, de 3 de julio , F. 2 ; 122/1998, de 15 de junio, F. 4 y 1/2000, de 17 de enero , F. 4). El concepto de interés legítimo, base de la legitimación procesal a que alude el artículo 19 de la Ley jurisdiccional contencioso-administrativa, que debe interpretarse a la luz del principio pro actione que tutela el artículo 24 de la Constitución (STC 45/2004, de 23 de marzo), equivale a la titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta. Sabido es que este Tribunal Supremo reiteradamente ha declarado, según se refiere en las sentencias de 7 de abril de 2005 (RC

5572/2002) con cita de las sentencias de 29 de octubre de 1986 , 18 de junio de 1997 y de 22 de noviembre de 2001 , «que el concepto de legitimación encierra un doble significado: la llamada legitimación « ad processum » y la legitimación « ad causam » . Consiste la primera en la facultad de promover la actividad del órgano decisorio, es decir, la aptitud genérica de ser parte en cualquier proceso, lo que « es lo mismo que capacidad jurídica o personalidad, porque toda persona, por el hecho de serlo, es titular de derechos y obligaciones y puede verse en necesidad de defenderlos » . Pero distinta de la anterior es la legitimación « ad causam » que, de forma más concreta, se refiere a la aptitud para ser parte en un proceso determinado, lo que significa que depende de la pretensión procesal que ejercite el actor o, como dice la sentencia antes citada, consiste en la legitimación propiamente dicha e « implica una relación especial entre una persona y una situación jurídica en litigio, por virtud de la cual es esa persona la que según la Ley debe actuar como actor o demandado en ese pleito » ; añadiendo la doctrina científica que « esta idoneidad específica se deriva del problema de fondo a discutir en el proceso; es, por tanto, aquel problema procesal más ligado con el Derecho material, habiéndose llegado a considerar una cuestión de fondo y no meramente procesal » . Y es, precisamente, el Tribunal Constitucional quien en el Fundamento Jurídico 5º de su sentencia de 11 de noviembre de 1991, ha dicho que « la legitimación [se refiere a la legitimación ad causam], en puridad, no constituye excepción o presupuesto procesal alguno que pudiera condicionar la admisibilidad de la demanda o la validez del proceso » . Antes bien, es un requisito de la fundamentación de la pretensión y, en cuanto tal, pertenece al fondo del asunto”.

Sobre la concreción del interés accionado cabe apuntar la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2011, recurso casación 104/2010 , que, en lo que aquí interesa, dijo:

"En lo que concierne a la tutela jurisdiccional de los intereses legítimos colectivos, habilitante de la legitimación corporativa u asociativa a que alude el artículo 19.1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según la doctrina jurisprudencial de esta Sala, debe analizarse la existencia de un vínculo entre la Asociación o Corporación accionante y el objeto del proceso contencioso-administrativo, de modo que del pronunciamiento estimatorio del recurso se obtenga un beneficio colectivo y específico, o comporte la cesación de perjuicios concretos y determinados, sin que de ello, se derive que asumen una posición jurídica de defensa abstracta del interés por la legalidad".

En la misma línea que las transcritas anteriormente de forma parcial, cabe apuntar la Sentencia de 26 de enero de 2012 , que enfatiza sobre la carga procesal que pesa sobre el impugnante consistente en la concreción de la afectación, y a su vez aclara y distingue entre la legitimación que otorga la acción popular, de la de defensa de intereses colectivos y de intereses difusos, haciéndose las siguientes consideraciones:

"Con carácter previo procede abordar, en adecuada sistemática, la invocada falta de legitimación de la Asociación recurrente para impugnar el Acuerdo recurrido y en el presente supuesto la referida Asociación, cuyos Estatutos han sido aportados, lo que genera

el cumplimiento del primer óbice de procedibilidad formulado por la representación del Ilmo. Sr... , reconoce en el artículo 2.b) de los mismos que le corresponde defender los intereses profesionales de sus miembros y la realización de actividades encaminadas al servicio de la Justicia. Se trata de consideraciones genéricas con alusión a extremos indeterminados sin que la Asociación esgrima consideración alguna, de manera precisa y pormenorizada, que determine en qué medida pueden verse afectados aquellos intereses por la propia actuación administrativa cuestionada, no de forma genérica, abstracta y potencial, sino de modo efectivo, concreto y específico.

.. En efecto, como ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala (por todas, las SSTs de 26 de mayo de 2003 y del Pleno de 31 de mayo de 2006), para que exista interés legítimo en la jurisdicción contencioso-administrativa, la resolución impugnada (o la inactividad denunciada) debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso.

Sobre este punto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala ha señalado:

a) Por interés, que la normativa vigente califica bien de «legítimo, personal y directo», o bien, simplemente, de «directo» o de «legítimo, individual o colectivo», debe reputarse toda situación jurídica individualizada, caracterizada, por un lado, por singularizar la esfera jurídica de una persona respecto de las de la generalidad de los ciudadanos o administrados en sus relaciones con la Administración Pública, y dotada, por otro, de consistencia y lógica jurídico-administrativas propias, independientes de su conexión o derivación con verdaderos derechos subjetivos.

b) Ese interés, que desde el punto de vista procedimental administrativo y procesal jurisdiccional es una situación reaccional, en pro de la defensa y efectiva reintegración de lo que doctrinalmente se ha llamado el propio círculo jurídico vital y en evitación de un potencial perjuicio ilegítimo temido, está conectado precisamente con este concepto de perjuicio, de modo que el interés se reputa que existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico o como cuando la persistencia de la situación fáctica creada o que pudiera crear el acto administrativo ocasionaría un perjuicio como resultado inmediato de la resolución dictada.

c) Salvo en los supuestos en que el ordenamiento reconoce legitimación para ejercer la acción pública, no basta como elemento legitimador bastante el genérico deseo ciudadano de la legalidad, pues es necesaria una determinada relación con la cuestión debatida ya que como señaló la sentencia de esta Sala de 26 de noviembre de 1994 , la legitimación "ad causam" conlleva la necesidad de constatar la interrelación existente entre el interés legítimo invocado y el objeto de la pretensión, o como dijo la sentencia de 21 de abril de 1997 , se parte del concepto de legitimación "ad causam" tal cual ha sido recogido por la más moderna doctrina como atribución a un determinado sujeto de un derecho subjetivo reaccional, que le permite impugnar una actuación administrativa que él considera ilegal, y que ha incidido en su esfera vital de intereses.

d) La defensa de ese derecho requiere, como presupuesto procesal, que el acto impugnado afecte, por tanto, a un interés del recurrente que en el orden contencioso-administrativo viene determinada por la invocación en el proceso de la titularidad de un derecho o interés legítimo que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de manera que la estimación del recurso produzca un beneficio o la eliminación de un perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial.

e) Resulta así que, en el ámbito de esta Sala del Tribunal Supremo se insiste en que la relación unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto impugnado), con la que se define la legitimación activa, comporta el que su anulación produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto (sentencia de este Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1.990), y presupone, por tanto, que la resolución administrativa pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien alega su legitimación, y, en todo caso, ha de ser cierto y concreto, sin que baste, por tanto, su mera invocación abstracta y general o la mera posibilidad de su acaecimiento. (SSTS de 4 de febrero de 1.991, de 17 de marzo y 30 de junio de 1.995 y 12 de febrero de 1.996, 9 de junio de 1997 y 8 de Febrero de 1999, entre otras muchas).

... se observa que la Asociación recurrente, además de la cita de la indicada sentencia del Tribunal Constitucional que contempla un caso específico distinto al presente, se limita a invocar la genérica defensa de los intereses profesionales, entendiendo que el acto impugnado incide en determinados requisitos y condiciones pero no identifica de manera alguna en que consiste tal incidencia y menos aún su relación con el concreto contenido del acto impugnado, cuestión que resulta determinante para poder examinar la concurrencia de ese vínculo especial entre los fines de la Asociación y el objeto del proceso...

... En razón de todo ello ha de concluirse que la Asociación recurrente no justifica la existencia de un vínculo específico entre el objeto del proceso y los fines y objetivos en cuya defensa está interesado, pues una cosa es que la Asociación constituida para la defensa de cualesquiera intereses o para el logro de cualesquiera finalidades resulte legitimada plenamente para impugnar actos administrativos, cuando esos intereses resulten afectados o, a juicio del propio ente, deban ser defendidos, tal y como se infiere, con toda claridad, del art. 19.1.aps. a) y b) de la Ley de esta Jurisdicción y otra bien diferente es que tal legitimación se reconozca indiferenciadamente sobre la base de perseguir fines genéricos respecto de la actuación de los poderes públicos, cuando, en este caso, el Acuerdo impugnado sólo incidía directamente en los participantes de una convocatoria, cuyo interés profesional sí estaba afectado y que se han personado adecuadamente en el proceso, sustentando la defensa de su propio interés legítimo, ausente en la Asociación recurrente.

Es cierto que se ha producido la expansión del concepto de la legitimación activa por la acentuación de la idea de los intereses colectivos o de grupo, como refleja la regulación que hoy hacen las Leyes 29/1998 y 1/2000, acogiendo la evolución iniciada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y continuada por el Tribunal Constitucional, pero

también, en este aspecto, la ampliación experimentada tiene sus límites y así resulta en cuanto a los intereses colectivos cuya diferencia con los intereses difusos - reconocidos por el art. 7 de la LOPJ, como aptos también para generar un título legitimador- se encuentra en que se residencia en tales entes, asociaciones o corporaciones representativas específicos y determinados intereses colectivos.

A diferencia de éstos, los intereses difusos no tienen depositarios concretos y son intereses generales que, en principio, afectan a todos los ciudadanos y que, por su interés prevalente, han obtenido reconocimiento público, plasmado en algún instrumento, incluso en normas constitucionales, y que no deben confundirse con la legitimación que nace, excepcionalmente, de la acción popular, que corresponde a cualquier ciudadano y que debe ser reconocida expresamente por la Ley o de una acción de alcance general como reconoce la STEDH 4/81 de 22 de octubre (asunto Dudgeon contra Reino Unido)".

Pues bien, respecto de la no nos cabe duda que
la misma tiene un interés legítimo en la impugnación de los Estatutos del ICAM, toda vez que entre sus fines, que se reseñan en el art. 4º-1 de los Estatutos, se encuentra el de *“la defensa de sus asociados y de cualesquiera otros profesionales para la protección de sus derechos o intereses que se vean afectados por las actuaciones realizadas por cualesquiera poderes públicos, consejos generales, consejos autonómicos de Colegios y Colegios Profesionales y Colegios Profesionales o por actuaciones realizadas sobre dichas Corporaciones”*, a su vez el 4º -3 fija como fines *“fomentar una adecuada regulación de los Colegios Profesionales”* y el 4º-4 establece también como fin de la asociación *“promover acciones encaminadas a una mejor ordenación del Sector ante las Administraciones central, autonómica y las Corporaciones Públicas y cuantos organismos estén relacionados con la Administración de Justicia”*, pues bien, todos estos fines estatutariamente establecidos habilitan a juicio de la Sección a reconocer a la un interés legítimo para
impugnar los Estatutos del ICPM.

Ciertamente, en ocasiones la jurisprudencia ha rechazado la existencia de una *“autoatribución estatutaria”* de la legitimación, valgan como ejemplos las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2010, 17 de julio de 2010, 13 de junio de 2014, 5 de mayo y 5 de octubre de 2015. Sin embargo consideramos que en nuestro caso existe un vínculo preciso con el interés del accionante, en el sentido arriba expuesto, pues considera la Sección que la defensa de los intereses profesionales de los asociados no se agota en la representación colegial, pese a ser esta absolutamente relevante (Cfr. art. 36 CE), sino que cabe, como aquí acaece, la eventual existencia de conflicto entre la corporación profesional y sus miembros, por lo que no cabe rechazar *a priori* la legitimación de la asociación actora, en cuanto mecanismo alternativo de defensa de los intereses de sus asociados.

QUINTO.- Conexo con lo anterior, la representación del ICPM, suscita la falta de legitimación de los actores en cuanto personas físicas. Sobre este extremo se pronunció ya la Sección en el auto de cuestiones previas de fecha 4 de abril de 2017- cuyos razonamientos

ahora se reiteran- en el que concluimos que dos de los iniciales recurrentes carecían de legitimación, en concreto D. _____ y D^a _____, al estar suspendido el primero de funciones (fol. 448) y al estar la segunda jubilada (folio 453).

Razona la representación del ICPM que los restantes Procuradores, en la actualidad no están colegiados en Madrid, estando los mismos adscritos en la actualidad al Colegio de Guadalajara. Para ello aporta diversas certificaciones (folios 448 y ss.) en las que consta la baja colegial de los mismos. Pues bien, sin perjuicio de lo que dijimos en el auto de 4 de abril que ahora reiteramos, hay un elemento nuevo, que no podemos desdeñar, cual es que, en el momento de convocatoria de la Junta General Extraordinaria, esto es, el 2 de julio de 2015, los mismos tenían condición de Procuradores adscritos al Colegio de Madrid, [Cfr. D. _____ que causó baja el 3 de diciembre de 2015 (folio 449); D^a _____,

que es baja en fecha 22 de febrero de 2016 (folio 450); D^a _____, quien es baja en fecha 27 de noviembre de 2015 (cfr. folio 451); D. _____, que causó baja en fecha 27 de noviembre de 2015 (folio 452); D. _____, quien causó baja en fecha 30 de abril de 2016 (folio 455) y D. _____,

que causó baja en el ICPM en fecha 22 de diciembre de 2016 (folio 456).

Resulta así que habiendo participado los recurrentes en la Junta General y habiendo presentado los mismos enmiendas al proyecto de Estatutos (D. _____ - a la totalidad, llegando a ser discutida en Junta- _____, D^a _____ y D. _____)

) no encontramos razón alguna para considerar que los Procuradores recurrentes, a título individual, carezcan de legitimación, pues consideramos, en los términos expresados en el fundamento cuarto de esta sentencia, que los mismos tienen un interés tutelable del que, fácil es concluir, se deriva la legitimación para actuar en este procedimiento.

SEXTO.- Despejadas estas cuestiones previas, conviene, que antes de analizar los motivos de fondo planteados por la parte recurrente, nos refiramos brevemente, a la base fáctica de la controversia que subyace al presente procedimiento.

En fecha 23 de enero de 2013, esta Sección 8^a del TSJ de Madrid dictó en el seno del PO 286/2011 acumulado al 275/2011, sentencia en la que anulaba los Estatutos del ICPM aprobados en fecha 25 de enero de 2011. Recurrida en Casación la meritada sentencia, el Tribunal Supremo, dictó en fecha 15 de junio de 2015 (RCAS 981/13) sentencia en la que confirmaba la sentencia de esta Sección.

A la vista de la nulidad de pleno derecho de los Estatutos colegiales de 2011, en fecha 26 de junio de 2015 se emite circular nº 105/2015 en la que se da cuenta a los colegiados del ICPM de la nulidad de los Estatutos colegiales de 2011, llevada a cabo por las sentencias arriba expresadas, indicándose a los mismos que, en breve, se remitirá la propuesta de Estatutos para el trámite de enmiendas.

En fecha 30 de junio de 2015 se reúne la Junta de Gobierno del ICPM y se procede a la aprobación por la misma del Proyecto de Estatutos, disponiéndose la convocatoria a Junta General Extraordinaria para el siguiente 23 de julio, abriéndose un plazo de enmiendas, hasta las 20 horas del 10 de julio de 2015.

En fecha 2 de julio de 2015 se libra la Circular 114/15 informando de los acuerdos anteriores a los Colegiados y convocándose a los mismos a la Junta General Extraordinaria de 23 de Julio, con indicación del plazo de presentación de enmiendas.

En fecha 15 de julio de 2015 se reúne nuevamente la Junta de Gobierno del ICPM procediéndose al examen de las enmiendas presentadas.

El siguiente 20 de julio de 2015, mediante circular 128/15, se informa a los Colegiados del resultado de la tramitación de las enmiendas reenviándoles a un enlace informático con el resultado de las mismas. Consta así mismo, a partir del folio 564, las enmiendas que la Junta de Gobierno del ICPM, entre las que se encuentran las de D.

D. , D. , D. , D.
, D^a. , D^a y D^a

El 23 de julio de 2015 se celebra la Junta General Extraordinaria en el Salón de Actos del Edificio de los Juzgados de Plaza de Castilla. Es de notar que en la expresada Junta, ninguno de los asistentes hizo mención alguna a las enmiendas consideradas extemporáneas. Tras el oportuno debate se aprueba por mayoría el proyecto de Estatuto.

En fecha 28 de julio de 2015, tras redactarse las enmiendas aceptadas en la Junta Extraordinaria anterior se remite el texto aprobado al Consejo General de Colegios de Procuradores de España. El siguiente 30 de julio se remite a los Colegiados circular nº 139/15 en la que se informa de la remisión al CGCPE de los Estatutos para su oportuno control de legalidad.

Mediante el Pleno del CGPE de fecha 11 de diciembre de 2015 se aprueba el proyecto de Estatuto del ICPM, haciéndose determinadas observaciones, comunicándose tal extremo a los Colegiados.

En fecha 17 de diciembre de 2015 se celebra Junta General Ordinaria, dándose cuenta a los integrantes de la Junta de la aprobación por el Pleno del CGPE del proyecto de Estatutos, así como las observaciones a los mismos, informándose que se va a proceder a su remisión a la Comunidad de Madrid, tras lo cual, en fecha 29 de diciembre de 2015 se remite a los Colegiados circular informativa nº 211/15 sobre estos extremos.

En fecha 12 de enero de 2016, se remite por el ICPM, al Registro de Colegios Profesionales, dependiente de la Dirección General de Justicia y Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad solicitud de inscripción de la modificación estatutaria anterior.

En fecha 22 de enero de 2016 se remite al ICPM comunicación por el Área de Colegios Profesionales, interesándose la mejora de la solicitud, debiéndose aportar determinados documentos complementarios.

Los siguientes 12 y 17 de febrero de 2016, tanto el Decano como el Secretario del ICPM, remiten la documentación requerida.

Los codemandantes se personan como interesados en fecha 18 de febrero de 2016, y, solicitan la suspensión de la tramitación del expediente de inscripción de los Estatutos.

En fecha 29 de febrero siguiente el Área de Colegios Profesionales remite al ICPM los escritos anteriores a fin de que alegue lo que tenga por oportuno en orden a la suspensión, formulándose alegaciones por el ICPM en fecha 16 de marzo de 2016.

En fecha 28 de marzo de 2016, nuevamente, alguno de los anteriores solicita ser tenidos por interesados así como la suspensión de la inscripción de los Estatutos. En 4 de abril de 2016 se comunica a los solicitantes que no ha lugar a tenerlos por interesados, así como que no procede la suspensión de la inscripción de los Estatutos.

En fecha 26 de abril de 2016 Área de Colegios Profesionales remite al ICPM un requerimiento para el ingreso del importe de una tasa por 40 €.

Previo informe de 25 de abril de 2016 del Área de Colegios Profesionales, Memoria explicativa de fecha 26 de abril, y solicitándose por esta dependencia el 5 de mayo de 2016 informes a la Subdirección General de Gestión de Personal y Relaciones con la Administración de Justicia, a la Subdirección General de Infraestructuras Judiciales y a la Subdirección General de Régimen Económico, dependientes todas ellas de la Dirección General de Justicia y Seguridad.

El 9 de mayo se dicta la Orden 1841/16 del Consejero de Presidencia y Justicia por la que se dispone la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la CAM y la publicación en el BOCM de la modificación de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid.

El 18 de mayo de 2016 se dicta Resolución por la Dirección General de Justicia y Seguridad de la CAM por la que se dispone la publicación en el BOCM de la modificación

total de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid, procediéndose a la publicación completa de los mismos en el BOCM nº 151 de fecha 27 de junio de 2016.

SEPTIMO.- Entrando ya en el análisis de las cuestiones de fondo, los recurrentes articulan dos motivos básicos a la hora de fundar su impugnación.

- a) Nulidad de Pleno derecho por omisión de trámites fundamentales, y,
- b) Nulidad de los actos por vicios en la formación de la voluntad de los miembros de la Junta.

Para analizar el primero de los capítulos de la impugnación es necesario que aclaremos que normativa era la que estaba vigente tras la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de junio de 2015 (RCAS 981/13), que, como sabemos, confirmaba la sentencia de esta Sección dictada en el 30 de enero de 2013 en la que se anuló los Estatutos del ICPM aprobados en Junta General Extraordinaria de fecha 15 de julio de 2010.

Considera la Sala que, anulados los estatutos de 2011, por virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de junio de 2015 (RCAs 981/13), eran aplicables los estatutos de 2007. Es evidente que el ICPM debía de regirse en el «interregno» por alguna norma de carácter estatutario que regulase su actividad. La Junta de Gobierno lo entendió así y consideró aplicables los estatutos anteriores a la anulación. Por otra parte, la propia Sección 1ª de esta Sala lo ha expresado en diversas ocasiones, en concreto en las sentencias de fecha 21 de junio de 2013 (RAP 294/ 2013) y de fecha 10 de mayo de 2013, (RAP 2526/2012) entre otras muchas. Así lo dicen también las sentencias de fechas de 14 de septiembre de 2012, de 17 de mayo de 2013 (RAP 2699/2012) y de 27 de julio de 2015, todas ellas de la Sección Primera de esta Sala, en el sentido de que se ha de admitir la aplicación del Estatuto de 2007 aunque se aceptase la nulidad de los Estatutos de 2011. Igualmente merecen cita las de fecha 17 de mayo 2013 (Sección Primera, RCA 762/2013, RAP 2699/2012). Igualmente hemos de notar que el Tribunal Supremo ha dictado muy recientemente, si bien, referido como todos los casos anteriores, a las bajas colegiales, un auto en fecha 11 de julio de 2018 (RCAs 408/18) en el que plantea, si como consecuencia de la anulación de los Estatutos de 2011 por virtud de la sentencia de 15 de junio de 2015 se produciría una reviviscencia de los Estatutos de 2007.

OCTAVO.- Despejada esta cuestión, ha de analizarse el contenido del primer motivo aducido por la representación de los actores.

Sostiene el recurrente que en la tramitación del procedimiento estatutario se incurrieron en varias omisiones/irregularidades, que lo vician de nulidad, al amparo del entonces vigente art. 62 de la Ley 30/1992. En este sentido hemos de notar que las citadas causas de nulidad, según la jurisprudencia, no se articulan para canalizar cualquier infracción

del ordenamiento jurídico que pueda imputarse a un acto administrativo, sino únicamente aquellas que constituyan, por su cualificada gravedad, un supuesto de nulidad plena, previsto en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992 (Sentencias de 27 de noviembre de 2009, de 26 de noviembre de 2010 , de 28 de abril de 2011 o de 5 de diciembre de 2012). Así, la apreciación en concreto de las causas de nulidad de pleno derecho que esgrime la recurrente, a tenor de las letras e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992 , imponen en el primer caso con claridad que el acto de que se trate carezca de los requisitos " **esenciales** " para la adquisición de facultades o derechos, es decir, no basta la carencia de " cualquier " requisito exigido por el ordenamiento jurídico para la validez del acto que da lugar a la adquisición del derecho o facultad; y, la segunda causa se reserva para los supuestos de omisión absoluta de procedimiento, que requiere que se haya prescindido totalmente de los trámites procedimentales, no bastando la omisión de alguno de ellos por importante que pudiera resultar, de suerte que la omisión procedimental deber ser no sólo manifiesta, sino también total y absoluta, esto es, que denote una inobservancia de las normas de procedimiento que afecte en su conjunto a la sustanciación del mismo, de manera global y no meramente parcial o accidental, es decir, que haya un apartamiento total y absoluto del procedimiento (STS 3ª, Sección 3ª, de 5 de diciembre de 2012 -RCAs nº 6076/2009 -). En algunas sentencias, además, el T.S. ha equiparado, a efectos del art. 62.1.e) de la Ley 30/1992, la ausencia total y absoluta de procedimiento con la omisión de algún trámite esencial, cuando ello se deba a la capital trascendencia y sustantividad de ese trámite (STS 3ª, Sección 7ª, de 24 de mayo de 2012 -RCAs nº 4853/2009-).

En primer lugar sostiene que el plazo para presentación de las enmiendas fue extremadamente breve, y, que en otras ocasiones se habían otorgado plazos más amplios. Ciertamente (vid folios 763, 764 y ss.) en otros casos de actividad normativa del Colegio se habían concedido plazos más amplios, pero tal extremo no puede viciar de nulidad la convocatoria, como ahora razonaremos.

Hemos de notar que los Estatutos de 2007, al regular en el art. 38 la Junta General Extraordinaria, a diferencia de para la Junta Ordinaria (art. 34.1) no establecen plazo alguno para la convocatoria. No existe en ningún precepto de los Estatutos de 2007 plazo para presentar enmiendas, por lo que cabría entender que la Junta de Gobierno, en base al art. 19.12 de dichos Estatutos de 2007, que atribuye como competencia de esta, la facultad de *“redactar o modificar los Estatutos y someterlos a la aprobación de la Junta General...”*.

Desde esta perspectiva nos parece que la Junta de Gobierno tenía facultad suficiente para ordenar los trámites de aprobación de los Estatutos, pues no es posible separar esta ordenación de la “modificación y redacción” que establece el art. 19.2 de los Estatutos de 2007.

Dicho esto es evidente que la posibilidad de enmendar el texto propuesto es facultad de los Colegiados, pero, también es facultad de la Junta de Gobierno la convocatoria de la

Junta Extraordinaria. Resulta así que la Circular 114/15 de 2 de julio, convocó la Junta General Extraordinaria para el 23 de julio, fijándose un plazo de presentación de enmiendas hasta el 10 de julio a las 20 horas. Plazo que, si bien pudiera ser un tanto exiguo, permitió la presentación de enmiendas en elevado número (seuo 99 enmiendas). Por otra parte, basta escuchar las más de dos horas que duró la Junta del 23 de Julio para ver la intensidad de los debates producidos, en los cuales, por cierto, no se hizo ni una sola objeción o salvedad por los recurrentes sobre estos extremos.

En esta misma línea cuestionan los recurrentes la inadmisión de sus enmiendas, por extemporáneas, expresando que tal rechazo *a limine* se realizó sin ninguna resolución que amparase tal determinación. Hemos de notar que tal extremo no puede aceptarse, toda vez que el 20 de julio de 2015, mediante circular 128/15 se informó a los Colegiados de las enmiendas aceptadas por la Junta de Gobierno, remitiéndose a los mismos un enlace informático donde podían acceder al contenido de las mismas. Es obvio que, presentadas todas las enmiendas de los recurrentes con posterioridad a las 20 horas del día 10 de julio – extremo que, por otra parte, los mismos no discuten- las mismas eran palmariamente inadmisibles, sin que pueda objetarse la regularidad de ese control formal por parte de la Junta de Gobierno, que nos parece inseparable de la facultad reconocida a ésta por el art. 19.2 de los Estatutos Colegiales de 2007, (facultad de “modificación y redacción de los Estatutos”) ; extremo que por otra parte resulta reconocido por la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2014 (RCAs 1255/2012) donde se establece la imposibilidad del Colegio para “*inadmitir enmiendas más allá de razones formales*”.

Igualmente hemos de notar que, a lo largo del desarrollo de la Junta General, ninguno de los recurrentes hizo manifestación alguna sobre la inadmisión de sus enmiendas.

Del mismo modo sostienen los actores que el plazo para la presentación de enmiendas debió entenderse concedido hasta la celebración de la Junta General, y, afirma que, en la práctica así se hizo en la Junta de 23 de julio de 2015, toda vez que se admitieron “*enmiendas in voce*”, en concreto las formulada por el Sr. _____, la planteada por el propio Decano Sr. _____ y finalmente la planteada por el Sr. _____. Las enmiendas *in voce*, son admitidas en el procedimiento legislativo y parlamentario, siempre y cuando tiendan a alcanzar un acuerdo entre las previamente presentadas y el texto legislativo o limitadas a correcciones terminológicas o gramaticales. En realidad, más que auténticas enmiendas, se trataría de mejoras al texto de la redacción de las originarias, consecuencia del propio debate habido en el seno de la Junta, lo cual es perfectamente razonable y no es más que la expresión democrática de la actuación interna de los Colegios Profesionales impuesta por el art. 36 de la CE.

Por otra parte, respecto de las enmiendas tempestivamente presentadas, sostienen los recurrentes que alguna de ellas también fue inadmitida *a limine*. No llegando a deliberarse en la Junta General. Abstracción hecha de la imprecisión del alegato, pues no se nos indica qué

concretas enmiendas fueron sustraídas de debate y deliberación por la Junta, hemos de notar que las llamadas enmiendas “*transaccionales*”, lejos de preterir el debate, lo que hacían era mejorar la redacción de enmiendas concurrentes y refundir las mismas para facilitar el debate en el seno de la Junta, realizándose estas enmiendas transaccionales con la aquiescencia de los Colegiados que hicieron las propuestas originales, por lo que no vemos vicio alguno que permita la anulación del procedimiento de elaboración del Estatuto.

NOVENO.- El segundo de los motivos de la demanda es la pretendida existencia de nulidad de los actos por vicios en la formación de la voluntad de los miembros de la Junta, que la parte residencia en el art. 62.1.e) de la Ley 30/1992.

Sostienen los actores que la convocatoria de la Junta General Extraordinaria estaba viciada *ab initio*, toda vez que la Junta de Gobierno ocultó a los Colegiados los verdaderos motivos de la convocatoria. Ciertamente no acaba la Sala de entender muy bien este alegato, pues la razón de la modificación estatutaria no es otra que la anulación de los Estatutos de 2011, operada por la Sentencia de esta Sala y Sección de fecha 23 de enero de 2013, (RCA 286/2011), sentencia que, como sabemos, fue confirmada por la del Tribunal Supremo de fecha 15 de junio de 2015 (RCAs 981/13).

No vislumbra la Sala esas finalidades torcidas que apuntan los actores (las presiones de desconocidas autoridades y la convalidación de un proceso electoral impugnado), pues, aceptando la existencia de la impugnación electoral -resuelta por el Juzgado 34 en Sentencia de fecha 17 de abril de 2017 (favorablemente para D.) confirmada después por la Sentencia de la Sección 6ª de este Tribunal de fecha 7 de febrero de 2018 (RAP 879/17) habiéndose inadmitido en fecha 18 de enero último el recurso de casación contra la misma interpuesta, por lo que, a día de hoy ha de reputarse firme- lo cierto y verdad es que la Junta de Gobierno presentó su dimisión el 13 de febrero de 2018 convocándose un nuevo proceso electoral, en el que por cierto, resultó nuevamente elegida la misma Junta de Gobierno, sin que conste a esta Sección que sobre las elecciones celebradas el 25 de abril de 2018 se hayan producido nuevas impugnaciones, con lo que no vemos que relación pudiera tener la aprobación de los Estatutos con las impugnaciones electorales. Respecto a la existencia de las presiones de desconocidas autoridades, hemos de señalar que pese a la alusión en Junta de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015, por el Sr. Decano de “*la tranquilidad necesaria de nuestros colegiados y autoridades*”, los colegiados sabían, desde el 26 de junio de 2015, fecha de la Circular 105/2015, que los Estatutos de 2011 estaban anulados en firme y que por lo tanto era necesario la elaboración de unos nuevos estatutos. No hay por lo tanto una voluntad viciada de la Junta a la hora de deliberar y aprobar los Estatutos de 2015, y desde luego a la Sala le parece razón suficiente para elaborar unos nuevos Estatutos la anulación de los anteriores, pues parece una exigencia razonable que las Corporaciones puedan funcionar con normalidad para el cumplimiento de sus fines, y, para ello, es necesario la existencia de unos Estatutos, con lo que consideramos que se respetaron

las normas esenciales de procedimiento, así como las reglas para la válida adopción de acuerdos de los órganos colegiados.

Por lo expuesto el motivo, como el anterior, debe ser desestimado.

DECIMO.- Finalmente ha de analizarse la cuestión referida a la anulación de las elecciones de 2015, por virtud de la inicial Sentencia del Juzgado 34 de lo Contencioso de fecha 17 de abril de 2017, confirmada después por la Sentencia de la Sección 6ª de este Tribunal de fecha 7 de febrero de 2018 (RAP 879/17) habiéndose inadmitido en fecha 18 de enero último el recurso de casación contra la misma interpuesto.

Entendemos que la anulación a posteriori del proceso electoral no puede implicar la anulación “en cascada” de todos los actos posteriores a las elecciones, en efecto, la nulidad del proceso electoral solo puede tener efectos *ex nunc*.

En efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de junio de 2012 (RCAs 4244/ 2011) aborda un supuesto parecido en el que se había anulado la constitución de un Consejo de Colegios, concluyendo en relación con la irrelevancia del motivo en el funcionamiento del Consejo con anterioridad al dictado de la sentencia de dicha Sala llegando a señalar que

“No podemos considerar que la misma llegue a producir o tenga virtualidad, para la declaración de una hipotética nulidad absoluta de pleno derecho del acto por incurrir la causa de nulidad del artículo 62.1 e) y f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre . Y ello por cuanto es a partir de la interpretación del "ejercicio profesional" efectuada por esta Sala, cuando se termina por cerrar qué requisitos han de cumplir los posibles candidatos para ejercer cargos electivos en la Corporación, sin que se hubiera adoptado resolución judicial cautelar alguna que suspendiera el ejercicio de la Presidencia por la persona que inicialmente había obtenido el mismo en virtud de elecciones celebradas o que manifestamente en el Presidente hubiera una absoluta incapacidad para serlo. Por tanto, y entendiendo que el principio de ejecutividad de los actos administrativos -artículo 56y57 de la Ley 30/1992- unido a la no concurrencia de un vicio de nulidad radical, absoluta, de pleno derecho que determinara una inexistencia absoluta y radical de las condiciones en la persona que ejercía el cargo de Presidente, determina que deba conservarse y dar ejecutividad y validez a los actos que por él fueron ejercitados, sin perjuicio de que alguno de ellos en concreto pudieran ser atacados por otros motivos que evidenciaran otros vicios o defectos " criterio que refuerza en su posterior Sentencia de 2 de octubre de 2012 (casación 4873/2011) con ocasión de la impugnación de la convocatoria y determinados acuerdos de la Asamblea General Ordinaria, de 12 de noviembre de 2009 del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados de Enfermería, señalando que " la invocación que se hace del art. 64.1 de la Ley 30/1992 tampoco permite modificar un ápice la conclusión alcanzada en la sentencia que acabamos de reproducir, pues: (1) es un precepto que debe coordinarse con el principio de ejecutividad de los actos administrativos y efectos "ex nunc" de la declaración de anulabilidad de dichos actos; (2) el artículo precisamente consagra el

principio de conservación del acto que ahora los recurrentes pretenden arrunbar; y (3) en ningún momento se ha probado -ni alegado siquiera- que de haber sido otros el presidente y los miembros del pleno los acuerdos aprobados por la Asamblea General hubiesen sido distintos, por lo que no se aprecia la relación de "dependencia" que exige aquel artículo para transmitir la nulidad.

Y es que deben tenerse en cuenta dos cosas. En cuanto a la convocatoria de la Asamblea General, que la misma resultaba preceptiva para aprobar los presupuestos, la liquidación de cuentas y el balance de situación correspondientes al ejercicio finalizado (artículo 26.3 de los Estatutos aprobados por Real Decreto 1.231/2.001). Y por lo que hace a los concretos acuerdos aprobados en dicha Asamblea, que no todos los miembros del Pleno - a los que afectó el fallo de nuestra sentencia de 3 de noviembre de 2010 - forman parte de la Asamblea General. Solamente forman parte de la misma el Presidente del Consejo y los restantes miembros de la Comisión Ejecutiva, que son designados por el Presidente entre los componentes del Pleno (artículo 33.1 de los Estatutos). Pero además de éstos, que suman un total de ocho miembros, constituyen la asamblea General todos los Presidentes de los Colegios, según el artículo 26.1 de los Estatutos. En consecuencia, no hay razón para que la anulación del proceso electoral de 2.006 afecte a la convocatoria y acuerdos de la Asamblea General de 2.009".

En parecido sentido la Sentencia de la Sección 1ª de este Tribunal de fecha 20 de junio de 2016 (RCA 704/2015).

Por otra parte pese a la afirmación de los recurrentes de la derivación de una nulidad *ex tunc* derivada de la anulación del proceso electoral de 2015, tal solución nos parece no ajustada puesto que, de concluirse tal extremo, el ICPM no podría cumplir con sus finalidades, toda vez que su actuación, al menos desde 2011, estaría totalmente y radicalmente viciada, siendo la totalidad de sus actuaciones nulas de pleno derecho, lo cual nos parece una solución difícilmente aceptable, incluso desde la perspectiva de los propios recurrentes, pues de ser eso cierto, estos ni siquiera podrían ejercer su profesión, pues el Colegio se vería abocado, fatalmente, a su disolución.

Todo lo anterior nos lleva, con rechazo de las causas de inadmisión planteadas a la íntegra desestimación del presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sra. Procurador de los Tribunales D^a _____, en su propio nombre, en de la Asociación en Defensa del Procurador y en el de D. _____, D. _____, D. _____, D. _____ y D^a _____, contra los actos administrativos que se mencionan en el primer antecedente de esta Sentencia, que, por no ser contrarios a Derecho se confirman íntegramente.

UNDECIMO.- Establece el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los

recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En nuestro caso, los demandados y codemandados han mantenido unas pretensiones de inadmisión, analizadas en los fundamentos tercero, cuarto y quinto de esta sentencia, y que, ya con anterioridad habían sido, igualmente rechazadas en virtud de los autos de 21 de noviembre de 2017, 14 de marzo de 2018, y, conexos con estos dos, los de 3 de octubre de 2018 y 30 de enero de 2019.

Por lo expuesto consideramos no procede hacer pronunciamiento en orden a las costas de este procedimiento, sin perjuicio de los pronunciamientos independientes contra el ICPM contenidos en los autos de fechas 3 de octubre de 2018 y 30 de enero último.

En su virtud y vistos los preceptos citados y aquellos que fueren de general y pertinente aplicación, por el poder que el pueblo español y la Constitución y las Leyes nos tienen conferido

F A L L A M O S

RECHAZANDO LAS CAUSAS DE INADMISIÓN propuestas debemos **DESESTIMAR y DESESTIMAMOS** el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sra. Procurador de los Tribunales D^a _____, en su propio nombre, en de la _____ y en el de D. _____, D. _____, D. _____ y D^a _____, contra los actos administrativos que se mencionan en el primer antecedente de esta Sentencia, que, por no ser contrarios a Derecho **SE CONFIRMAN ÍNTEGRAMENTE.**

No se hace pronunciamiento en orden a las costas de esta instancia, sin perjuicio de los pronunciamientos independientes contra el ICPM contenidos en los autos de fechas 3 de octubre de 2018 y 30 de enero último.

Expídanse por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia las copias y testimonios que fueren precisos de esta resolución archivándose el original en el legajo especial de

sentencias que en esta Sección se custodia conforme lo establecido en el art. 256 de la L.O.P.J.

Notifíquese la presente resolución con arreglo a lo dispuesto en el art. 248 de la L.O.P.J. expresando que contra la misma cabe interponer recurso de casación cumpliendo los requisitos establecidos en los art. 86 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, debiendo prepararse el recurso ante esta Sección en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2582-0000-93-0683-16 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2582-0000-93-0683-16 en el campo “Observaciones” o “Concepto de la transferencia” y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos en nombre de S.M. el Rey de España.

Juan Pedro Quintana Carretero

Amparo Guilló Sánchez Galiano

Rafael Botella García-Lastra

Juana Patricia Rivas Moreno

María del Pilar García Ruiz

María Dolores Galindo Gil